



Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe

Montevideo, 25 a 28 de octubre de 2016

INFORME URUGUAY

Informe Nacional Uruguay 2013-2016 (de acuerdo a pautas CEPAL)

XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Uruguay es un país que presenta avances específicos hacia la Igualdad de género: posee un marco normativo avanzado en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, matrimonio igualitario, leyes de protección de los derechos al trabajo de grupos rezagados como el trabajo doméstico y rural. Sin embargo, aún debe reconocer problemas específicos para que las mujeres uruguayas, y sus niñas, niños y adolescentes, puedan desarrollarse en autonomía. Las problemáticas de la violencia de género, las desigualdades en el mercado laboral, la baja representación de mujeres en puestos de decisión estratégicos y el embarazo adolescente continúan estando presentes.

Para fortalecer las políticas hacia la igualdad de género, Uruguay, en el año 2015, reinstaló en Consejo Nacional de Género (CNG) - integrado por jerarcas de alto nivel de los ministerios y principales organismos públicos como el ámbito político institucional de definición de las prioridades y compromisos en materia de políticas hacia la igualdad de género. Participan también representantes sociales de la academia, de las empresas, del movimiento sindical, movimiento de mujeres y feminista.

En el Consejo Nacional de Género se definieron las prioridades de política pública para el quinquenio 2016-2020, desde una concepción de derechos humanos, buscando potenciar la visión de las mujeres como ciudadanas que aún poseen barreras para el ejercicio pleno de sus derechos. Siguiendo las pautas CEPAL para la elaboración de este informe se seleccionaron los siguientes compromisos:

Derecho a una vida libre de violencia:

Se han alcanzado diversos avances en relación a la política pública de erradicación de la Violencia Basada en Género y Generaciones, sin embargo a los efectos de este informe se destacan alguno de ellos.

El abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres y niñas, niños y adolescentes, mantuvo durante años una respuesta fragmentada por sector, focalizada en la emergencia y con énfasis en la Violencia Doméstica. A partir de la Ley Nº 17.514 de Violencia Doméstica (2002), se constituyó el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD)¹ y posteriormente se instaló el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV)², iniciándose un proceso de desarrollo de las políticas basadas en la interinstitucionalidad y la articulación de una red de servicios donde cada organismo (salud, seguridad, servicios sociales, educación, entre otros) actúe según su competencia y según las características de cada situación, concretándose en un ***“Sistema interinstitucional de respuesta integral a la Violencia basada en género”***. La creación del CNCLVD ha contribuido a fortalecer y coordinar la acción pública en esta materia. Tiene por finalidad: asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia, velar por el cumplimiento de la ley Nº 17.514 y su reglamentación, diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia doméstica, promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra la violencia doméstica, elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus cometidos y sobre la situación nacional de la violencia doméstica, entre otros.

Dicho Sistema ha apelado a un conjunto de acciones que permiten fortalecer los mecanismos interinstitucionales y la especificidad de cada sector, desde una perspectiva de Derechos humanos, género, generaciones, étnico-racial, de la diversidad sexual y de discapacidad. Está constituido por acciones de prevención, la red de servicios de atención, la resocialización de varones, el acceso al sistema de justicia, los sistemas de información así como la formación y capacitación. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) la puesta en funcionamiento del Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género forma parte de la estrategia para ofrecer una respuesta integral y especializada en la temática. Dicho sistema está compuesto por: 19 Servicios de Atención a mujeres en situación de

1

El CNCLVD está integrado por INMUJERES que lo preside, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Fiscalía General de la Nación, Administración de Educación Pública, Congreso de Intendentes y tres representantes de la sociedad civil integrantes de la Red Uruguaya contra la VD y Sexual, y en calidad de invitados participan: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Banco de Previsión Social y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

2

El SIPIAV está presidido por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), lo integra el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Violencia basada en Género, 18 Dispositivos de Articulación Territorial (DAT); Servicios de Atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual; Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por Violencia Doméstica; Soluciones Habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de Violencia Doméstica y 4 Servicios de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de verificación y presencia y localización en situaciones de Violencia Doméstica con alto riesgo de vida (Tobilleras). Estos últimos servicios cuentan con dos equipos técnicos, uno especializado en la atención a mujeres en situación de violencia basada en género y otro especializado en la atención con los varones agresores.

En el 2013 se culmina el trabajo de elaboración e implementación de la primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones. La realización de la encuesta permitió contar por primera vez en Uruguay con una herramienta de rigurosidad metodológica, que define una línea de base que permitirá monitorear la evolución de las situaciones de violencia basada en género y generaciones, ejercida en los diferentes ámbitos y conocer sus principales características.

En 2015 se ratificó lo realizado y se definió como prioridad para este período de Gobierno una Vida Libre de Violencia de Género. En el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica se elaboró el "Plan de Acción 2016-2019, por una Vida libre de Violencia de Género, con mirada generacional", aprobado a través del Decreto 306/015, con el objetivo de contribuir a consolidar una política pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas. Los principios orientadores del Plan son: Principios de igualdad y equidad de género; Respeto, promoción y ejercicio de los Derechos Humanos; Laicidad y erradicación del patriarcado; Integralidad de las políticas; Mirada integral a la Violencia Basada en Género; Profundización democrática; Participación ciudadana y diálogo Estado–Sociedad Civil y Principio de Transparencia.

Asimismo, el CNCLVD elaboró un ***"Documento de Insumos para un Anteproyecto de Ley Integral de Violencia Basada en Género"***; en armonía con los instrumentos nacionales y compromisos que el Estado uruguayo ha asumido en la materia. El proyecto incluye la prevención y promoción de derechos, la atención y reparación; declara los derechos y garantías para las mujeres; define procesos de protección, investigación y penalización y determina los procesos en los ámbitos administrativos, civiles y penales. Asimismo este Proyecto comprenderá los diversos ámbitos en que ocurre la violencia basada en género, fortaleciendo la legislación en relación al acceso a la justicia: la efectividad de las medidas de protección, la adecuación de los procesos a las necesidades específicas de las distintas poblaciones: niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, tomando en cuenta su condición o no de discapacidad; y la reparación integral. Actualmente se encuentra a estudio del Senado de la república a través de la Comisión de Población y Desarrollo.

En noviembre de 2015 se institucionalizó la Mesa Interinstitucional para la prevención y combate de la trata de personas³ (Decreto 304/015). Es el ámbito de articulación de organismos del Estado y sociedad civil, a través del cual se planifican acciones comunes y se concretan respuestas para el abordaje de la trata y el avance en el fortalecimiento de la política pública. El pasado 23 de setiembre en el marco de un acto central de conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se llevó adelante la presentación del ***"Documento de Insumos para un Anteproyecto de Ley Integral para la Prevención y Combate a la Trata de Personas"*** a las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

Derecho a los cuidados y a la protección social:

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) fue creado por Ley Nº 19.353 en 2015, con el objeto de promover el desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, mediante un conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado. La Ley prevé dentro de sus directrices la inclusión de las perspectivas de género y generacional, promoviendo la superación cultural de la división sexual del trabajo y la distribución de las tareas de cuidados entre todos los actores de la sociedad.

Mediante la ampliación de la oferta de centros de cuidados infantil, la extensión de la cobertura de la educación primaria a los 3 años de edad, junto a la prestación de asistentes personales para personas en situación de

dependencia, como mención de algunas de las principales prestaciones planificadas para el quinquenio; se van articulando otras prestaciones, servicios y acciones normativas del SNIC, que pretende alcanzar la universalidad mediante procesos progresivos de implementación.

Las áreas de formación de las personas que cuidan, así como la de regulación del trabajo remunerado de cuidados, son ejes estratégicos que ha priorizado el INMUJERES para su contribución a la política de cuidados. INMUJERES integra la Junta Nacional de Cuidados (órgano de conducción política del Sistema) y participa activamente en otros espacios del SNIC, impulsando permanente la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de diseño e implementación del SNIC. Se ha logrado el compromiso de las diversas instituciones que conforman el SNIC hacia la transversalización de género en los programas de formación que se imparten.

Se ha avanzado en el diseño de un programa de **“cuidados a domicilio”** a través de la instalación de **“Casas Comunitarias de Cuidados” (CCC)**, dirigido a la primera infancia (énfasis en bebés de 0-1 año). La formación de las personas que cuidan y la supervisión y formalización de estas prácticas de cuidados, es uno de los ejes que actualmente se está abordando y donde se está transversalizando el enfoque de género en las fases de diseño e implementación.

Otra iniciativa de INMUJERES es la construcción interinstitucional de un conjunto de herramientas que orienten a la instalación de prácticas igualitarias a través del **“Sello Cuidando en Igualdad”**. Ello permitirá que centros de cuidados de primera infancia puedan certificarse como promotores de cuidados igualitarios incorporando esta dimensión a la medición de calidad de los mismos.

Se ha desarrollado una campaña pública en TV, radio y cartelera urbana **“Juntos cuidamos mejor”**, que tiene como objetivo sensibilizar sobre el cuidado en tanto derecho, y la corresponsabilidad del mismo entre Estado, mercado, comunidad y familia, así, como también entre hombres y mujeres.

Es fundamental destacar la ampliación y extensión de la cobertura de cuidados en primera infancia superando en algunos casos las metas previstas para el 2016 (niños/as de 3 años en Jardines Administración Nacional de Educación Pública- ANEP); construyendo nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Centro de Atención a la Infancia y Familia - CAIF/ Instituto Nacional del Menor- INAU); la difusión de las CCC y gestiones para la instalación de las primeras experiencias; la realización de estudios sobre las demandas de cuidado de los/as trabajadores/as de empresas privadas con propuestas a estudio para la instalación de centros de cuidados producto del acuerdo en ámbitos de negociación bipartita entre sindicatos y empresas; avances en un primer informe de consultoría sobre las modalidades de supervisión de los principales centros públicos de cuidados (Ministerio de Educación y Cultura, Administración Nacional de Educación Pública e Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y un programa de formación básica para educadoras/es y cuidadoras/es en primera infancia.

Asimismo, la participación ciudadana y la descentralización han guiado algunas de las acciones que se encuentran hoy en fase de implementación. Tal es el caso del proyecto de **“Iniciativas Locales de Corresponsabilidad de Género en los Cuidados”**, el cual plantea mediante el trabajo articulado entre la Secretaría de Cuidados del SNIC, la Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el INMUJERES impulsar en la agenda de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) la incorporación de estrategias de sensibilización de amplio alcance sobre la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito de los cuidados⁴. También INMUJERES se encuentra en fase de planificación de una estrategia de comunicación y sensibilización que permitirá trabajar en diversos territorios la temática de la corresponsabilidad social en relación a las tareas de cuidados para la reproducción de la vida cotidiana (mediante la modalidad de talleres y apoyados en una muestra fotográfica itinerante diseñada a tales efectos). De esta manera se intenta una llegada directa y una “campaña socio-comunicativa de cercanía” que permita instalar la temática de los cuidados y la corresponsabilidad social.